



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

GABINETE

Vista la solicitud de acceso a la información pública con nº de expediente 001-078112 realizada por [REDACTED], titular del Documento Nacional de Identidad [REDACTED], formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG), se informa lo siguiente:

Facilitar la información solicitada puede representar un perjuicio para las relaciones exteriores, la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, conforme a lo previsto en los artículos 14.1.c), d) y e) de la LTAIPBG.

Esta limitación al derecho de acceso a la información viene motivada porque los intercambios de información entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros Cuerpos de investigación o Agencias, con funciones de prevención de ciertas tipologías delictivas (en este caso abusos sexuales infantiles online), están basados en la investigación y prevención de actos delictivos que, en su caso, pueden conllevar una actuación judicializada.

Al tratarse de asuntos que están, o pudieran estar, relacionados con el crimen organizado, están sujetos al acuerdo del Consejo de Ministros de 06 de junio de 2014, por el que se da el carácter de secreto a este tipo de temática.

Además, dar a conocer estos intercambios de información puede perjudicar la relación de confianza establecida entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos o Agencias implicados, por lo que las relaciones exteriores de España se verían dañadas de una manera u otra, perjudicando en última instancia, por falta de colaboración, la tarea operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al haberse difundido datos que son de interés para la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Al margen de lo anteriormente reseñado, recopilar la información solicitada (nº de investigaciones recibidas del NCMEC desagregadas según los criterios solicitados, a partir del 2018, además de direcciones IP, etc.), implicaría un desvío de recursos humanos y técnico considerable, por lo que se considera igualmente afectado por el artículo 18.1.c) de la LTAIPBG implicando una tarea de reelaboración necesitando un trabajo previo a la difusión de información.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno





en el plazo de UN MES, desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez resuelta dicha reclamación, o de no hacer uso de la misma, podrá interponer, ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES, desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa de la reclamación o en que éste deba entenderse presuntamente desestimada, y en el caso de no hacer uso de la misma, desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 20.5 de la Ley 19/2013, y 25, 26, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 12 de mayo de 2023.

LA DIRECTORA DEL GABINETE



Ana María Prejigueiro Rodríguez